

PANAMÁ: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS 2014

RESUMEN

Panamá es una democracia constitucional multipartidista. En mayo, los votantes eligieron a Juan Carlos Varela Rodríguez como presidente en elecciones nacionales que fueron generalmente consideradas libres e imparciales por los observadores internacionales y locales. Varela tomó posesión de su cargo el 1 de julio. Las autoridades mantuvieron el control efectivo de los cuerpos de seguridad.

Los abusos de los derechos humanos más destacados fueron las condiciones penitenciarias duras, marcadas por el hacinamiento y la atención de la salud inadecuada; la ineficacia judicial, incluido un sistema jurídico susceptible a la corrupción y a las influencias externas; y la corrupción generalizada, a menudo impune.

Otras denuncias de abusos de los derechos humanos incluyeron las detenciones preventivas prolongadas, la violencia contra mujeres y niños, la trata de personas, la marginación de la población indígena, la discriminación social basada en la condición del VIH-SIDA y la orientación sexual, y el trabajo infantil.

El gobierno inició proceso penal en pocos supuestos casos de corrupción o de abuso de autoridad por funcionarios gubernamentales, dejando una amplia percepción de impunidad.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

No hubo informes en cuanto a si el gobierno o sus representantes habían cometido asesinatos arbitrarios o ilícitos.

En 2013, en la Carretera Panamericana cerca de la localidad de San Carlos, la policía disparó contra un auto en el que creyó erróneamente iban unos prisioneros fugados, y mató a un niño de dos años y a una chica de 15. En junio, el presidente saliente, Ricardo Martinelli, firmó 368 indultos presidenciales, incluidos los indultos de los policías Adelina Pérez y Alexander Rosales, que supuestamente habían disparado contra los menores en el incidente de San Carlos. Los abogados de la sociedad civil impugnaron los indultos ante la Corte Suprema de Justicia

como inconstitucionales. En noviembre, la Corte Suprema no había decidido sobre el caso, pero por medio del Decreto Ejecutivo N° 472 de 14 de agosto, el Presidente Varela revocó todos los indultos presidenciales otorgados por el entonces Presidente Martinelli. Para finales de año, Pérez y Rosales seguían detenidos.

Persistía una amplia percepción de impunidad, ya que todos los años se anunciaban investigaciones pero no se publicaban los resultados.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

c. Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La constitución prohíbe estas prácticas y no hubo informes de que los funcionarios del gobierno las hubiesen empleado durante el año, aunque hubo casos de abusos de agentes policiales en años anteriores a quienes el presidente saliente Martinelli indultó; posteriormente el Presidente Varela revocó los indultos. Ese fue el caso de los agentes Boris Rodríguez Morales y Alberto Mario Rodríguez, quienes en mayo fueron condenados por un juzgado de lo penal a cuatro años y dos meses de prisión por golpear a Rafael Martínez en 2012 y recibieron indultos del presidente saliente Martinelli en junio, pero posteriormente el Presidente Varela revocó sus indultos en agosto. Ambos agentes de policía seguían detenidos a finales de año.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones carcelarias siguieron siendo duras y a veces peligrosas para la vida a causa del hacinamiento, de la falta de guardas carcelarios, de servicios médicos y de condiciones sanitarias inadecuadas.

Situación física: Para septiembre el sistema penitenciario tenía una capacidad prevista de 8.406 personas pero mantenía a 15.578 reclusos (14.501 hombres y 1.077 mujeres). Para aliviar el hacinamiento, el gobierno puso en libertad a 1.024 reclusos que habían cumplido dos tercios de sus condenas.

Se mantuvieron separados a los reclusos de las reclusas, y a los menores de los adultos. Los detenidos preventivamente compartían celdas con reclusos condenados debido a la falta de espacio. Las autoridades carcelarias continuaron separando a los dos grupos. Para agosto, las autoridades separaron al 60% de los detenidos en prisión preventiva de los reclusos condenados. Aun cuando las

condiciones carcelarias de las mujeres generalmente eran mejores que las de los hombres, ambas poblaciones seguían sufriendo de hacinamiento, atención médica deficiente y falta de suministros básicos para la higiene personal. En los centros preventivos y de custodia juveniles también se sufría de hacinamiento y condiciones pobres. Los reclusos no gozaban de supervisión adecuada. Durante el año, las autoridades contrataron a 136 guardias carcelarios, pero solo había un total de 879 guardias carcelarios en todo el país a pesar de que hacían falta 1.400. En todas las cárceles, los reclusos se quejaban del poco tiempo que pasaban fuera de sus celdas y del acceso limitado a las visitas familiares. Pequeñas cárceles anexadas a estaciones de policía locales a veces mantenían a reclusos por días o semanas, y los agentes de policía que los custodiaban no tenían la capacitación necesaria como custodios para prevenir abusos.

La administración tomó algunas medidas para abordar el hacinamiento en las prisiones, como por medio de la decisión del Consejo de Política Penitenciaria de equipar nuevas salas de audiencias en los complejos de La Joya y La Joyita, lo que incrementaría el número de audiencias programadas semanalmente. Para octubre, una nueva sala de audiencias inaugurada en diciembre de 2013 seguía sin estar equipada.

La hipertensión, la diabetes, la dermatitis y las enfermedades respiratorias eran las enfermedades más comunes entre la población penitenciaria. La atención médica en las prisiones era inadecuada debido a la falta de personal y de recursos médicos. Las unidades médicas penitenciarias carecían de insulina. Los familiares de los reclusos podían traer medicinas con el permiso de las autoridades, aunque algunos familiares sobornaron a los agentes para eludir las autorizaciones necesarias. Los funcionarios del sistema penitenciario reclamaron a las autoridades de la Policía Nacional de Panamá (PNP) que unos agentes de la PNP habían confiscado o destruido las medicinas de los reclusos durante redadas. Los funcionarios del sistema penitenciario informaron que había cinco médicos en el complejo de La Joya-La Joyita, así como un médico en la prisión de mujeres, uno en la prisión Colón, uno en El Renacer y uno en Tinajitas. Las clínicas dentro de las cárceles de La Joya y La Joyita brindaban asistencia de primeros auxilios y básica, pero no tenían la capacidad de tratar problemas médicos más graves. En algunas instalaciones no había agua potable, ni ventilación adecuada ni luz.

De las 135 denuncias de los reclusos a la Defensoría del Pueblo para noviembre, la gran mayoría estaba relacionada con la atención médica deficiente o inadecuada, el abuso policial y los problemas con el sistema de transporte para asistir a citas médicas. La Joyita tenía una clínica con 48 camas, pero seguía infrautilizada por la

falta de guardias para vigilar a los reclusos enfermos, así como por la falta de equipo médico para casos más graves. En vez de utilizar la clínica, las autoridades trasladaban a los pacientes con enfermedades graves a clínicas públicas; sin embargo, a menudo era difícil gestionar el transporte de reclusos a las mismas. El sistema penitenciario no tenía servicio de ambulancias; se tenía que transportar a los reclusos en vehículos policiales cuando había alguno disponible, y no se prestaba asistencia médica durante el viaje. Un recluso británico de la cárcel de La Joya murió por heridas a causa de una caída una vez llegó a un hospital público, después de esperar horas a ser trasladado. Se estima que, entre enero y septiembre, un 60% de los reclusos perdió sus citas médicas debido a la falta de escoltas de la Policía Nacional.

Para noviembre ocho reclusos habían muerto a causa de violencia entre reclusos, uno se había suicidado, uno había muerto por heridas debidas a una caída y 28 habían muerto de enfermedades crónicas y por causas naturales.

Para julio, un total de 3.169 reclusos estaban inscritos en programas educativos dentro y fuera de las prisiones. Para septiembre, 1.974 reclusos trabajaban dentro y fuera de las prisiones. El sistema continuaba aplicando una reducción de condena del “2x1” (se reducía un día por cada dos días de trabajo o estudio).

Administración: *Software* actualizado para el mantenimiento de expedientes solo funcionaba en tres prisiones (La Chorrera, Llano Marín y La Joyita); las otras prisiones utilizaban una versión anterior y los planes para actualizarlo se habían retrasado. Los jueces pueden ordenar la libertad condicional como alternativa a la condena de menores delincuentes no violentos. Para octubre, los jueces habían puesto en libertad condicional a menores infractores no violentos, lo cual requirió de asesoría psicológica, asistencia regular a la escuela y reuniones periódicas con una trabajadora social. Para octubre se había otorgado arresto domiciliario a 34 infractores juveniles. El nuevo sistema de justicia acusatorio, en funcionamiento en cuatro provincias para fin de año, incluye disposiciones para la negociación de acusaciones y condenas y de esta forma reduce el encarcelamiento de adultos infractores no violentos.

El programa piloto de 2011 relacionado con el monitoreo electrónico de reclusos no violentos que no habían ido a juicio siguió suspendido. Los reclusos manipularon los dispositivos abriéndolos por la fuerza y salieron de las instalaciones y después regresaron sin que nadie se diera cuenta. Los representantes del sistema penitenciario siguieron estudiando el uso de brazaletes electrónicos para reclusos.

Los reclusos podían presentar sin censura denuncias ante las autoridades judiciales y podían solicitar investigaciones sobre acusaciones fidedignas en cuanto a condiciones inhumanas; sin embargo, las autoridades no documentaron los resultados de dichas investigaciones de forma que fueran accesibles al público. La Defensoría del Pueblo negoció y realizó peticiones en nombre y representación de los reclusos y recibió denuncias sobre condiciones carcelarias. La Defensoría del Pueblo siguió realizando visitas semanales a las cárceles, y el gobierno generalmente no controló sus reuniones con los reclusos. Para octubre, la Defensoría del Pueblo había recibido 15 denuncias de abusos físicos cometidos por agentes de la PNP, 50 denuncias sobre la falta de acceso a la atención médica, 19 denuncias sobre la falta de acceso a abogados y cuatro denuncias sobre la denegación de acceso a la educación.

Los reclusos en la mayoría de las prisiones tenían un acceso razonable a las visitas, aunque a veces los familiares de los reclusos tenían que esperar haciendo fila frente a las cárceles entre las 5:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde para obtener aprobación para las visitas y eran sometidos a cacheos al desnudo antes de entrar. Los reclusos podían practicar sus denominaciones religiosas.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió la vigilancia penitenciaria por observadores independientes no gubernamentales, incluida una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la cual posteriormente emitió un informe exhaustivo sobre la corrupción en el sistema penitenciario. La organización no gubernamental (ONG) católica Justicia y Paz realizó visitas periódicas y reportó que a varios grupos religiosos de diferentes denominaciones no se les había impedido el acceso. Las ONG de derechos humanos que quieren tener acceso a las prisiones durante las horas de visita entre las 9:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde deben enviar una solicitud por escrito a la Dirección General del Sistema Penitenciario con 15 días de antelación. Según las recomendaciones de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2013, la administración del Presidente Varela invitó a la UNODC y a la CIDH a visitar el país para asesorarle sobre los procedimientos para abordar problemas relacionados con el hacinamiento, el comportamiento ilícito y las detenciones carcelarias prolongadas. El gobierno advirtió a la CIDH que la rama judicial había incrementado la cantidad de video audiencias para acelerar los casos y reducir las detenciones prolongadas.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y del aparato de seguridad

El país no tiene fuerzas militares. La PNP es responsable de la aplicación de la ley y del orden público nacional. Las autoridades civiles en el Ministerio de Seguridad Pública mantuvieron control efectivo sobre todas las fuerzas policiales, de investigación, fronterizas, aéreas y marítimas en el país. El gobierno tiene mecanismos para investigar y castigar los abusos y la corrupción, pero la información sobre los procedimientos y los resultados de investigaciones casi nunca se hizo pública. Esta falta de transparencia incluyó casos de muertes de civiles durante disturbios civiles en 2012 y 2013.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La Fiscalía emite las órdenes de detención con base en las pruebas. La ley estipula que los sospechosos deben ser llevados ante un juez sin demora; sin embargo, la falta de una lectura de cargos inmediata seguía siendo un problema, salvo en los distritos que operan bajo el nuevo sistema de justicia acusatorio conforme al cual la falta de una lectura de cargos inmediata invalidaría la detención. La ley requiere que los oficiales que ejecutan el arresto informen a los detenidos inmediatamente de la razón del arresto o la detención y del derecho a un abogado de inmediato. La ley estipula que existe la fianza y, si bien existe un sistema de fianza funcional para una cantidad limitada de delitos, este casi no se usaba en la mayoría de los casos procesados bajo el antiguo sistema penal inquisitivo, el cual estaba en efecto en la mitad de los distritos judiciales. Bajo el sistema inquisitivo, la mayoría de los procesos de fianza están a discreción de la Fiscalía y no pueden ser iniciados de forma independiente por los detenidos o sus abogados. A los detenidos se les permitía acceso sin demora a un abogado y a sus familiares, y el gobierno suministró a los acusados indigentes un defensor público.

La ley prohíbe que la policía detenga a sospechosos por más de 48 horas sin autorización judicial, pero permite la detención de menores por 72 horas. Por ley bajo el sistema inquisitivo, la fase de investigación preliminar de la detención puede durar de ocho días a dos meses, y la fase de investigación de seguimiento puede durar otros dos a cuatro meses, dependiendo del número de sospechosos.

Detención preventiva: El gobierno periódicamente mantenía detenidos a los reclusos por más de un año bajo el sistema inquisitivo antes de una audiencia

preliminar ante un juez y, en algunos casos, la detención preventiva excedía la condena mínima para el supuesto delito. Esto se debía en gran parte a la ineficacia judicial y al uso de un sistema inquisitivo por escrito. Para septiembre, conforme a las estadísticas del gobierno, el 63% de los reclusos estaban en detención preventiva. Los tribunales en las cuatro provincias que empezaron a utilizar el sistema acusatorio reflejaron una disminución en la mora judicial: la duración de los procedimientos se redujo en un 85%. La comunicación entre las autoridades mejoró y el uso de los nuevos procedimientos permitió seguir el calendario de las audiencias.

e. Denegación de juicio público imparcial

La ley estipula que el órgano judicial es independiente; sin embargo, el sistema judicial fue ineficiente y susceptible a corrupción e influencias externas y hubo acusaciones de manipulación por el órgano ejecutivo. Durante la audiencia en agosto de la CIDH en México, las ONG panameñas denunciaron —y la CIDH coincidió— que la falta de una carrera judicial profesional que instituyese procedimientos para nombramientos, promociones y acciones disciplinarias les daba amplia discrecionalidad a los jueces para aplicar los reglamentos, comprometía la independencia del sistema judicial y permitía a las más altas autoridades ejercer presión sobre un sistema ya débil.

La Dirección de Investigación Judicial, bajo el control administrativo de la PNP, brinda servicios de investigación al sistema judicial. A nivel local, los alcaldes nombran a jueces administrativos (corregidores) que ejercen jurisdicción sobre casos civiles menores y la detención y la imposición de multas y de condenas carcelarias de hasta un año. Fuera de la Ciudad de Panamá este sistema tenía serios defectos. Estos jueces usualmente no tenían capacitación legal u otra experiencia pertinente. Los acusados no tenían garantías procesales adecuadas. El proceso de apelación generalmente no existía. Los acusados pudientes a menudo pagaban las multas mientras que los acusados menos pudientes eran encarcelados.

Procedimientos judiciales

La ley estipula que se presume que todos los ciudadanos acusados de un delito son inocentes y tienen derecho a asesoría legal, a evitar incriminarse o a incriminar a familiares cercanos y a ser enjuiciados solamente una vez por un delito dado. Si no está en detención preventiva, el acusado puede estar presente con su abogado durante la fase investigativa del proceso.

En 2011 el gobierno empezó a aplicar un nuevo código de procedimiento penal (diseñado para la transición nacional del sistema de justicia inquisitivo a un sistema acusatorio), cuyo proceso iba a finalizar en 2014. Sin embargo, en 2013, la Asamblea Nacional votó retrasar la aplicación de las dos fases restantes por dos años, hasta 2015 y 2016, respectivamente, dejando el nuevo sistema acusatorio intacto en los distritos en los que ya se había aplicado. El sistema, cuyo objetivo es agilizar la administración de la justicia, tiene tres componentes: la investigación fiscal supervisada por un juez de garantías cuya responsabilidad es garantizar el debido proceso, una solicitud para la formulación de cargos por parte del fiscal y los juicios orales con un grupo de tres jueces.

Los juicios están abiertos al público de acuerdo con el sistema judicial inquisitivo, que estaba en vigor en todas las provincias excepto en las cuatro que utilizaban el sistema acusatorio. La ley estipula que el juicio con un jurado se da si el acusado lo solicita, pero solo en casos en los cuales una de las acusaciones es de asesinato. Los jueces pueden ordenar la presencia de personas en detención preventiva para declarar o ampliar las declaraciones o para realizar un careo con los testigos. Los juicios se realizan con base en las pruebas presentadas por el fiscal. Los acusados tienen derecho a estar presentes en el juicio y a consultar con un abogado de forma oportuna. Los acusados se pueden carear o interrogar a los testigos en su contra y presentar testigos y pruebas a su favor. Los acusados y sus abogados tienen acceso a pruebas pertinentes en posesión del gobierno. Los acusados tienen derecho a apelar. La ley extiende estos derechos a todos los ciudadanos, y el órgano judicial generalmente los aplicó.

La ley obliga al gobierno a suministrar defensores públicos para los indigentes. En muchos casos los defensores públicos recibieron el caso en etapas avanzadas de la investigación, cuando el fiscal ya había evaluado la mayoría de las pruebas y decidido recomendar el llamamiento a juicio. Bajo el sistema inquisitivo no había procedimientos bien establecidos para que los acusados objetaran la admisibilidad de las pruebas.

El gobierno tomó medidas para reducir el número de detenciones preventivas pendientes: nombró a dos nuevos jueces, limitó el uso del programa “juzgado móvil” (solo en Darién) que atendía los complejos carcelarios de La Joya-La Joyita y Metetí e incrementó el uso de video audiencias en salas que se instalaron en prisiones para ese fin, aunque dos salas en la cárcel de Colón no funcionaban debido a la falta de personal técnico para manejar el equipo. Para mayo, se habían programado 1.528 audiencias en las provincias con el sistema inquisitivo, de las cuales 221 se llevaron a cabo en juzgados y 759 fueron video audiencias. Las otras

548 audiencias no tuvieron lugar debido a la ausencia de los abogados de los acusados.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los ciudadanos tienen acceso a los juzgados para entablar juicios por daños y perjuicios por violaciones de los derechos humanos y para solicitar el cese de dichas violaciones. La mayoría no entabla los juicios porque el proceso es largo y tedioso. Hay soluciones administrativas y judiciales para los supuestos daños, y las autoridades a menudo las otorgan a ciudadanos que cumplen con el proceso. El tribunal puede ordenar soluciones civiles, incluida una compensación justa a la persona perjudicada. Los casos relacionados con los derechos humanos de una persona pueden ser presentados a la CIDH por medio de solicitudes de personas u organizaciones; por su parte la CIDH puede presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe estas acciones y el gobierno generalmente respetó las prohibiciones. El Ministerio Público mantuvo a representantes en cada división de la PNP para aprobar los allanamientos y cacheos y se aprobaron muchos de ellos durante el año.

La ley también establece los requisitos para realizar vigilancia a través de intervenciones telefónicas. Niega a los fiscales la autoridad de ordenar intervenciones telefónicas bajo su propia autoridad, y requiere de autorización judicial para estas.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La constitución brinda libertad de expresión y de prensa, pero hubo algunos intentos por parte del gobierno de Martinelli entre enero y junio de impedir la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Libertad de prensa: En mayo, la corte civil condenó a cinco periodistas de radio y televisión y a dos de la prensa escrita a pagar más de 725.000 balboas (US \$725.000) a un miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá por calumnia e injuria, como consecuencia de un artículo publicado en el periódico *La Estrella* en 2011 sobre la concesión de un contrato. Las organizaciones de periodismo locales, incluido el Foro de Periodistas, criticó la sentencia como un ataque a la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa consideró la sentencia como amenaza e intimidación, con efectos muy negativos para quienes están a cargo de investigar e informar al público.

A mitad de agosto la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la solicitud de hábeas data de tres periodistas de *La Prensa* presentada más de un año antes durante el gobierno de Martinelli. El fallo estaba relacionado con información solicitada al ex ministro de seguridad pública, José Raúl Mulino, a la contralora general, Gioconda De Bianchini, y a la ex defensora del pueblo, Patria Portugal, relativa a contratos gubernamentales para equipo de seguridad y radar, anomalías en la Caja de Seguro Social y acceso a información en el sitio web de la Defensoría del Pueblo. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un periodista de *La Prensa* sobre su solicitud hábeas data de información en 2013 sobre la transferencia de fondos públicos en la provincia de Herrera.

Violencia y acoso: En marzo la ex presentadora de televisión, Castalia Pascual, denunció haber recibido amenazas telefónicas. Esa misma semana, su empresa de medios de comunicación, TVN, informó que el sitio web de la empresa TVN-2.com había sido víctima de piratería informática, lo que impidió que los usuarios entraran en el sitio. El presentador de noticias de Telemetro, Álvaro Alvarado, denunció haber recibido amenazas contra él y su familia por su reportaje sobre la supuesta corrupción gubernamental (durante el gobierno de Martinelli).

Libertad de acceso a internet

El gobierno no limitó ni interrumpió el acceso a internet ni censuró el contenido en línea. No existieron informes fiables de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal pertinente, aunque sí hubo informes fidedignos de que el gobierno anterior lo había hecho. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2012 había 1.75 millones de usuarios de internet en el país, lo que representaba el 45% del total de la población.

Libertad académica y actos culturales

No hubo restricciones por parte del gobierno en cuanto a la libertad académica o eventos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La ley contempla las libertades de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. Sin embargo, la policía en ocasiones utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes, especialmente cuando bloqueaban las autopistas o calles. La ley establece que cualquiera que, mediante el uso de la violencia, obstaculice el tránsito de vehículos en la vía pública o que ocasione daños a la propiedad privada o pública puede ser condenado a prisión de 6 meses a 24 meses.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (*International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley contempla la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación y el gobierno generalmente respetó estos derechos, salvo en algunas oportunidades con respecto a la circulación local en la provincia de Darién. El gobierno cooperó, en general, con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias en la protección y asistencia a los refugiados, a las personas bajo protección temporal humanitaria (PTH), a los solicitantes de asilo y a otras personas que son motivo de preocupación. El ACNUR tenía una unidad dedicada a Panamá en su oficina regional.

Circulación en el país: El gobierno en general permitió la libertad de circulación a los refugiados y a los solicitantes de asilo reconocidos como tales. En el transcurso del año, los colombianos bajo el régimen de PTH residentes en la región Darién, colindante con Colombia, recibieron tarjetas migratorias que les dieron libertad de circulación, mientras que antes solo podían salir de esa zona con permisos especiales temporales emitidos por la Oficina Nacional para Atención a los Refugiados (ONPAR).

Protección de los refugiados

Acceso al asilo: Las leyes del país incluyen la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proteger a los refugiados. Un grupo de colombianos bajo PTH ha vivido en la región de Darién por más de 18 años. Una ley de 2011 establece una ruta para que aquellos que se encuentran bajo PTH obtengan residencia legal permanente y requiere que el gobierno concluya este proceso de regularización en un período de dos años a partir de la aprobación de la ley. La ONPAR coordinó este proceso con el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el ACNUR, la Dirección Nacional del Registro Civil y la Embajada de Colombia. El censo más reciente de la ONPAR contabilizó a 413 personas designadas bajo PTH, y para octubre solo seis de ellas no habían recibido tarjetas nacionales de identificación y permisos laborales. Ninguna persona designada bajo PTH había recibido una tarjeta de residente permanente, lo que a veces dificultó el acceso a ciertos servicios como la educación, la salud y el comercio. Además, otras 65 personas no designadas bajo PTH en Darién fueron declaradas casos especiales por la ONPAR y también recibieron residencia permanente.

Conforme a la ONPAR, para julio había 1.608 personas refugiadas, de las cuales 901 eran colombianas. Había 712 solicitudes pendientes para recibir condición de refugiado y 368 de estas eran de colombianos.

SENAFRONT, la fuerza nacional encargada de la protección de fronteras y costas, detectó a 3.564 migrantes cubanos que llegaron entre enero y octubre en comparación con 1.808 en 2013. La mayoría pasó por Panamá camino hacia el norte. Un decreto ejecutivo permite a los cubanos que llegan al país recibir visas de tránsito sin ser detenidos. A pesar de ello, 250 cubanos que llegaron a mitad de octubre fueron detenidos en una instalación de SENAFRONT (designada para 30 personas) por lo menos cinco días bajo observación médica como medida preventiva contra enfermedades como el virus del ébola.

El gobierno informó sobre la continua migración de personas del sur de Asia y de África en ruta hacia América del Norte. Para agosto, 877 migrantes de fuera del hemisferio occidental, la mayoría de Bangladesh y Nepal, habían entrado por Darién, y 375 personas habían solicitado asilo entre enero y junio. **La mayoría de los solicitantes de asilo eran colombianos.** Las autoridades típicamente detenían a los migrantes de fuera del hemisferio occidental mientras verificaban sus identidades y revisaban sus solicitudes de asilo. Para agosto, se había detenido a

2.270 personas en la instalación de detención de migración para hombres (Curundú) y a 78 en la instalación para mujeres (Avenida Cuba).

Conforme al ACNUR y a las ONG conexas que implementan sus programas, cientos de personas que viven en el país pueden necesitar protección internacional. Esto incluye personas a las que no se les concedió asilo, personas cuyas solicitudes fueron rechazadas y personas que no solicitaron la condición de refugiado debido a ignorancia o temor de deportación. Algunos buscaron legalizar su condición de otras formas. El ACNUR informó que trabajaba con cuatro afganos que hacía cuatro años intentaban conseguir asilo. Pasaron un año detenidos y después fueron puestos en libertad porque el centro de detención no les podía proporcionar atención médica.

Se brinda a inmigrantes ilegales la oportunidad de legalizar su condición de conformidad con el programa “Crisol de Razas”, siempre que puedan probar que están empleados y de que paguen tarifas de entre 1.300 y 1.800 balboas (US \$1.300 y US \$1.800). El gobierno anunció que el programa, iniciado cuatro años antes bajo el gobierno anterior, iba a ser suspendido a final de año. Un total de 12.260 inmigrantes de Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, entre otros, habían solicitado normalizar su situación.

Devolución: La ley incorpora protección contra la devolución y sanciones por ingreso ilegal o irregular. A veces, sin embargo, los funcionarios fronterizos y las autoridades en los centros urbanos no entendían bien cuáles eran sus responsabilidades cuando trataban con personas en busca de condición de asilo o de refugiados. Esta falta de comprensión daba lugar a detenciones arbitrarias y ponía a los solicitantes de asilo en mayor riesgo de ser devueltos forzosamente a países donde sus vidas o su libertad podrían estar en peligro. En junio la ONPAR, la SENAFRONT y el Servicio de Migración Nacional firmaron un acuerdo que confirmaba que el gobierno cumpliría con su obligación conforme a la convención de 1951 sobre el principio de no devolución. Representantes del ACNUR informaron que no había habido casos de devolución durante el año.

Empleo: Los refugiados reconocidos por las autoridades tienen el derecho de trabajar, pero estos se quejaron de que se enfrentaban a prácticas de contratación discriminatorias.

Acceso a servicios básicos: A los refugiados a veces se les negaba el acceso a la educación, mientras que a otros no se les emitían diplomas si no podían presentar registros escolares de su país de origen.

Soluciones duraderas: La ley permite que las personas reconocidas legalmente como refugiadas o con condición de asilo que han vivido en el país más de tres años soliciten residencia permanente; durante el año hubo 174 personas, y aquellas en su núcleo familiar, que solicitaron residencia permanente, pero no había información disponible sobre cuántos fueron aceptados para reasentamiento en el país. Para noviembre no había información disponible sobre si el gobierno había proporcionado asistencia para el regreso seguro y voluntario de refugiados a sus hogares.

Protección temporal: Las únicas personas a quienes les otorgaron protección temporal fueron aquellas a las que se les reconocía la condición de PTH, regularizadas conforme a una ley de 2011 que estableció los procedimientos para que este grupo de refugiados pudieran ser residentes permanentes. La ONPAR es la responsable del proceso, con apoyo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Dirección Nacional del Registro Civil y el Servicio de Migración Nacional.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La ley brinda a los ciudadanos la capacidad de cambiar su gobierno por medio del derecho al voto en elecciones libres e imparciales, y en general los ciudadanos ejercieron este derecho. Por ley debe haber elecciones populares directas cada cinco años para elegir presidente, vicepresidente, diputados y representantes locales. Los ciudadanos naturalizados no pueden aspirar a ocupar ciertas categorías de cargos electivos.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: En mayo, los electores escogieron a Juan Carlos Varela Rodríguez, el candidato de la oposición de la alianza El Pueblo Primero, como presidente en elecciones nacionales que observadores independientes consideraron que en general habían sido libres e imparciales. Fueron elegidos 71 diputados (incluidos, para noviembre, nueve en disputa), 77 alcaldes, 648 representantes locales y 7 concejales. Un 76% de los ciudadanos votaron, lo que fue un récord.

El Tribunal Electoral supervisó las elecciones, las cuales la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró habían tenido una “alta participación de los ciudadanos que llegó al 76.8%, quienes ejercieron el

sufragio de manera pacífica y con gran vocación cívica”. La misión de la OEA resaltó los esfuerzos de las “autoridades panameñas para promover la inclusividad de las elecciones”.

Partidos políticos y participación en la política: La ley exige a los nuevos partidos políticos cumplir estándares rigurosos en cuanto a su membresía y organización a fin de obtener el reconocimiento oficial y poder participar en las campañas nacionales. La ley también requiere que los partidos políticos obtengan el equivalente a un 4% del total de votos emitidos para poder mantener su carácter como tales. El Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el Partido Popular cumplieron con este requisito. El Frente Amplio por la Democracia (FAD), el único partido de izquierdas, no cumplió con el requisito. El FAD no consiguió ningún escaño de diputado ni alcalde, pero obtuvo dos representantes locales en zonas rurales. La ley electoral permite al FAD inscribirse de nuevo una vez cumpla con los requisitos legales.

Participación de la mujer y de las minorías: Las mujeres ocuparon 13 escaños en la Asamblea de 71 miembros y 5 puestos en el gabinete de 18 miembros. Cinco escaños en la Asamblea estaban designados para representar a las regiones indígenas reconocidas del país. En general, los diputados en la Asamblea, los miembros del gabinete y los miembros de la Corte Suprema no se identificaron como miembros de minorías étnicas o raciales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, pero el gobierno de forma general no aplicó estas leyes eficazmente. Se alegó que funcionarios del gobierno participaron con impunidad en prácticas corruptas. La corrupción siguió siendo un problema en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, al igual que en los estamentos de seguridad.

Existen mecanismos anticorrupción tales como la extinción de dominio, la protección de informantes y testigos, la negociación de acusaciones y condenas y las normas de conflicto de interés profesional. A pesar de que la ley estipula que los nombramientos judiciales son a través de un sistema de mérito, los grupos de la sociedad civil declararon que la influencia política y la interferencia indebida de jueces de alto nivel debilitaban el sistema.

Corrupción: La ley 33, promulgada en 2013, asciende el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción a la Autoridad Nacional para la Transparencia

y Acceso a la Información Pública (ANTAI). La ANTAI investiga y lucha contra la corrupción del gobierno. La ANTAI siguió recibiendo críticas de los grupos de la sociedad civil por no operar de forma eficaz e independiente. La ANTAI parecía tener suficientes recursos. Durante el año, la ANTAI no emitió ninguna sanción o multa a entidades gubernamentales que negaron acceso a la información pública.

En 2013, el año más reciente del que se dispone de estadísticas, la sección local de Transparencia Internacional informó que el gobierno no había progresado mucho en su lucha contra la corrupción, específicamente en casos relacionados con posibles conflictos de interés y acceso libre a la información pública. El informe enfatizó la falta de reglamentos sobre prohibiciones y las incompatibilidades que deberían ser aplicadas a todas las autoridades electas, la falta de normas para sancionar las ausencias laborales no aprobadas por parte de las autoridades electas y la falta de reglamentos sobre el uso de recursos públicos.

La corrupción y la falta de responsabilidad entre los agentes de policía persistieron.

En mayo la Fiscalía Segunda Anticorrupción abrió un expediente por peculado al ex viceministro de comercio interior Luís Eduardo Camacho González. Camacho González supuestamente estuvo implicado directamente en las operaciones de un centro de llamadas que hacía campaña política a favor del partido Cambio Democrático, en ese entonces el partido gobernante. Las operaciones del centro de llamadas fueron supuestamente sufragadas con fondos públicos. En septiembre, los abogados de Camacho González presentaron un recurso contra la orden de indagatoria de la fiscalía, pero el 13 de octubre, el juez dispuso a favor de la fiscalía. La fecha de la indagatoria no se había fijado.

En julio las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ex ministra de trabajo, Alma Cortés, por obtener el doble de viáticos para un mismo viaje oficial en 2011. Además, las nuevas autoridades declararon que supuestamente Cortés, su hermana –en ese entonces, una asesora en el ministerio de trabajo– y otro representante del ministerio habían recibido fondos públicos para un viaje oficial a Suiza de 27 días, mientras que los boletos aéreos mostraban que la misión oficial ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra solo había durado una semana. Cortés se presentó ante la fiscalía en septiembre para impugnar los cargos. La fase de investigación del caso seguía en curso a final de año. Los fondos en cuestión sumaban un total de 25.000 balboas (US \$25.000).

En 2013 el gobierno despidió a tres empleados, incluido el director regional de Veraguas, Rolando Rosas, de la Dirección General de Ingresos y presentó cargos de extorsión contra ellos. Para octubre no existían actualizaciones disponibles de este caso en particular.

En 2013, el Tribunal Penal 12 condenó al ex ministro de educación, Belgis Castro, a tres años de prisión por peculado de 153.000 balboas (US \$153.000) en la Ciudad de Panamá. Sus abogados apelaron. Castro tenía cargos de peculado en siete otras causas en varias provincias. Para octubre no había novedades sobre ninguna de las causas pendientes contra Castro.

Divulgación de información financiera: La ley requiere que ciertos funcionarios del órgano ejecutivo y del órgano judicial presenten declaraciones patrimoniales a la Contraloría General. En la declaración, los funcionarios deben proporcionar información sobre sus declaraciones de renta, cuentas bancarias, deudas pendientes y membresía en organizaciones. La información no es pública a menos que el funcionario así lo autorice. En julio, el Presidente Varela y varios miembros de su gabinete, así como el alcalde Blandón de la Ciudad de Panamá, hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales juradas. Otros miembros del gabinete y autoridades presentaron sus declaraciones ante un notario público para que fueran enviadas a la Contraloría General, pero no autorizaron acceso público a las mismas. Las autoridades presentan denuncias penales solo en casos de ganancias ilícitas, aunque a los funcionarios se les retiene el salario si no presentan la declaración.

Acceso público a información: La ley contempla el acceso público a información sobre entidades públicas, excepto a las actas de las reuniones del gabinete. El gobierno a menudo, pero no siempre, daba respuesta a las solicitudes de información. La mayoría de estas solicitudes provenía de abogados. Se pueden apelar las denegaciones de acceso ante la Corte Suprema y los periodistas generalmente utilizaban este recurso. La fecha límite es de 30 días y no se cobran honorarios procesales. Hay sanciones por no cumplir, principalmente multas. Había poca divulgación pública y poca capacitación sobre las leyes de libertad de información y sus procedimientos.

El gobierno se comprometió a colocar información pública en los sitios web oficiales. Sin embargo, muchos ministerios y agencias del gobierno no actualizaban sus páginas, y las estadísticas y otra información a menudo tenían una antigüedad de más de un año o no estaban disponibles.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaban generalmente sin restricción gubernamental e investigaban y publicaban sus resultados sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron y se mostraron receptivos a sus puntos de vista.

Entidades gubernamentales de derechos humanos: El defensor del pueblo, elegido por la Asamblea Nacional y con autoridad moral pero no legal, contó con la cooperación del gobierno y operó sin interferencia de este ni de los partidos. La Defensoría del Pueblo remitió casos a las autoridades investigativas pertinentes.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación con base en la raza, el sexo, la discapacidad, el idioma y la condición social, pero el gobierno no siempre aplicó estas prohibiciones de manera eficaz.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza la violación, incluida la violación conyugal, con prisión de 5 a 10 años, o de 8 a 10 años en el caso de circunstancias agravantes (uso de un arma). La violación representó la mayoría de los delitos sexuales investigados por la PNP y su Dirección de Investigación Judicial. Las ONG declararon que muchas mujeres fueron reacias a denunciar las violaciones a las autoridades por miedo a represalias, respuestas inadecuadas y estigmas sociales. El Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), parte del Ministerio de Seguridad Pública, informó de 434 casos de violación carnal para finales de junio.

La violencia doméstica siguió siendo un problema serio, pero solo se denunciaban un pequeño número de casos. Una ley de 2013 contra la violencia de género estipula penas más severas por acoso y tanto por abuso emocional como físico, y establece 30 años de encarcelamiento por asesinato. La ley penaliza la violencia doméstica y la familiar con periodos de encarcelamiento de dos hasta cuatro años y hace de la violencia doméstica una circunstancia agravante en casos de homicidio. También ordena medidas de educación y de prevención de la violencia, así como una gama de servicios de apoyo a las víctimas, pero el gobierno no aplicó la ley de manera eficaz. Las estadísticas del SIEC informaron de 8.595 casos de violencia

doméstica entre enero y junio. Las estadísticas de enero hasta junio del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, dirigido por la Defensoría del Pueblo, mostraron que, de las 26 mujeres que murieron violentamente, 22 murieron como resultado de violencia doméstica. Las autoridades consideran que la aprobación de la ley contra el femicidio de 2013, junto a campañas de sensibilización públicas, llevaron a que más mujeres presentaran denuncias de violencia doméstica, pero la Defensoría del Pueblo mostró preocupación por la falta de protección de las víctimas y por el mínimo número de acusaciones y condenas, que podían disuadir a la mujeres a denunciar esos abusos.

El gobierno, por medio del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), maneja un albergue en la Ciudad de Panamá para víctimas de violencia doméstica que proporcionó servicios sociales, psicológicos, médicos y legales a aproximadamente 40 mujeres en 2013, el año del cual se disponía de datos más recientes. Los albergues en Chiriquí y Colón no operaban debido a la falta de personal de apoyo. En agosto, funcionarios del INAMU llevaron a cabo talleres de capacitación para ONG, psicólogos, abogados y trabajadores sociales en la provincia de La Chorrera. En noviembre, el gobierno nombró a Liriola Leoteau de Ávila nueva directora general del INAMU.

Mutilación genital femenina y ablación (MGF): Aunque no existe una ley que prohíba la MGF, esta prácticamente no existe en el país.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en casos de relaciones entre empleador y empleado tanto en el sector privado como en el público, y en relaciones entre maestro y estudiante; los infractores pueden ser condenados a hasta tres años de cárcel. El alcance del problema fue difícil de establecer dado que las condenas por acoso sexual fueron raras, y el acoso sexual previo a la relación laboral no se podía procesar. Las estadísticas del gobierno mostraron 69 casos de acoso sexual abiertos entre enero y junio. A pesar de la falta de datos, la Defensoría del Pueblo proporcionó información anecdótica de un aumento percibido en el número de casos de acoso sexual hacia las mujeres. La falta de informes oficiales se atribuyó a la ausencia de un protocolo de seguimiento después de que se presentan las denuncias, a la falta de resultados favorables en algunos casos anteriores y a la posibilidad de despido de la mujer que presenta una denuncia.

Derechos reproductivos: Las parejas y los individuos tienen el derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, cuándo los quieren tener y el intervalo entre los nacimientos, y tenían la información y los medios para hacerlo, incluido el derecho

a obtener la mejor calidad de salud reproductiva sin discriminación, coacción ni violencia. El acceso a información sobre anticonceptivos y a la asistencia capacitada durante el parto y postparto estaban ampliamente disponibles, salvo en las regiones con población indígena a nivel provincial, donde el acceso era muy limitado, conforme a la Cruz Roja Americana y a la Defensoría del Pueblo. La ley de 2013 sobre esterilización permite a las mujeres de 23 años o más que ya tienen dos hijos decidir si quieren esterilizarse voluntariamente. El gobierno no tenía datos sobre cuántas mujeres optaron por esterilizarse.

Discriminación: La ley prohíbe la discriminación por razones de género, y las mujeres gozaban de los mismos derechos que los hombres en virtud de las leyes de familia, bienes y penales. La ley establece el régimen de bienes gananciales en el matrimonio. La ley obliga que la remuneración sea igual para hombres y mujeres en trabajos equivalentes. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el INAMU promovieron la igualdad de las mujeres en el entorno laboral, e igual remuneración por igual trabajo, intentaron reducir el acoso sexual y abogaron a favor de reformas legales. A pesar de la falta de datos, la Defensoría del Pueblo proporcionó información anecdótica de un aumento percibido en el número de mujeres contratadas recientemente que fueron despedidas una vez se supo que estaban embarazadas. Aunque la práctica no es legal, muchos posibles empleadores pidieron pruebas del embarazo.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: A pesar de que la ley contempla la ciudadanía para todas las personas nacidas en el país, los padres de menores en áreas remotas a veces tenían dificultad en obtener actas de nacimiento.

Maltrato de menores: El MIDES mantuvo una línea de atención telefónica gratuita ampliamente difundida para que los menores y los adultos reportaran maltratos de menores. El ministerio suministró fondos a albergues para menores, que las ONG manejaban en siete provincias, y continuó con un programa que utilizaba folletos en las escuelas para concientizar a los maestros, estudiantes y padres sobre el maltrato y explotación sexual de menores. Para junio, los datos del gobierno informaron sobre 345 casos de maltrato de menores y de adolescentes.

Matrimonio forzado y a edad temprana: La edad mínima legal para el matrimonio es 18 años, sin embargo las niñas pueden casarse a los 14 y los niños a los 16 con el consentimiento de los padres.

Mutilación genital femenina y ablación (MGF): Aunque no existe una ley que prohíba la MGF, esta prácticamente no existe en el país.

Explotación sexual de menores: El abuso sexual de menores fue reportado en áreas urbanas y rurales, al igual que en las comunidades indígenas. Para junio, los datos del gobierno daban a conocer 18 nuevos casos de pornografía infantil.

La ley prohíbe las relaciones sexuales consensuales entre adultos y menores entre 14 y 18 años, salvo menores que están casados con el consentimiento de sus padres, y estipula una condena de hasta tres años de cárcel por este delito. Si el menor tiene menos de 14 años, el delito tiene una pena de 4 años a 10 años de cárcel. La ley estipula un periodo de encarcelación de 3 años a 5 años para cualquiera que practique, facilite o promueva la corrupción de un menor y también penaliza la pornografía infantil con la misma sanción. El código penal también castiga el vender o negociar la compra de actos sexuales con prostitutas con penas de hasta 10 años de prisión cuando la víctima es menor de 18 años. El turismo sexual infantil también es penalizado.

Sustracción internacional de menores: El país es parte de la Convención de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener más información, ver el informe del Departamento de Estado de los EE. UU. sobre cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/english/legal/compliance.html e información específica por país en travel.state.gov/content/childabduction/english/country/panama.html.

Antisemitismo

Había una población judía de aproximadamente 12.000 personas. No hubo informes de actos de carácter antisemita.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidad

La ley prohíbe la discriminación basada en la discapacidad física, sensorial, intelectual o mental; sin embargo, la constitución permite la denegación del proceso de naturalización a personas con discapacidades mentales o físicas. Por ley es obligatorio el acceso a edificios públicos nuevos o remodelados para personas con discapacidad y se requiere que las escuelas integren a niños con discapacidades. Las personas con discapacidades sintieron considerable discriminación en cuanto al acceso al transporte, empleo, educación, atención a la salud y al suministro de otros servicios estatales. En el momento de su introducción en 2011, la nueva flota de autobuses de la Ciudad de Panamá tenía acceso para sillas de ruedas, pero la posterior instalación de torniquetes dificultó el acceso de los pasajeros en sillas de ruedas. El metro de la Ciudad de Panamá, inaugurado en abril, tiene ascensores para las personas con discapacidad, pero la mayor parte del tiempo los ascensores estaban cerrados con llave y no se podían utilizar. La mayoría de los comercios tenían rampas para sillas de ruedas y estacionamientos accesibles tal como lo requiere la ley, pero en muchos casos no eran acordes con las especificaciones gubernamentales en cuanto al tamaño. Algunas escuelas públicas admitían a niños con discapacidades mentales y físicas, pero la mayoría no tenían instalaciones adecuadas para otros niños con discapacidades. El gobierno instaló rampas en algunas escuelas e integró a algunos niños con discapacidades. Hubo pocas escuelas privadas que admitiesen a niños con discapacidades.

El programa Ángel Guardián de 2012 que proporciona una ayuda económica de 80 balboas (US \$80) al mes para menores con discapacidades físicas severas, seguía funcionando. Para poder participar en el programa, los padres o tutores de un niño deben vivir en condiciones de pobreza y deben presentar un certificado médico que acredite el nivel de discapacidad y la condición de dependencia del niño. Un total de 7.286 personas con discapacidades recibió un cheque por 160 balboas (US \$160) durante el cuarto pago de fondos en octubre. El nuevo gobierno permitió que los familiares de los beneficiarios averiguaran, por medio del sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, el lugar donde los cheques iban a ser entregados.

Para agosto no había ningún fallo de la Corte Suprema en relación a la objeción contra la Ley 35 con base en la discriminación y la protección de información privada. La ley de 2010 requiere que el Tribunal Electoral incluya las discapacidades de la persona, así como el tipo de sangre y las alergias, en la cédula de identificación nacional para casos de emergencia. La ley también requiere que la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre incluya la misma información en las licencias de conducir emitidas por el estado. Ni el Tribunal

Electoral ni la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre aplicaban esta ley.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) es la agencia del gobierno responsable de proteger los derechos de las personas con discapacidades. El Ministerio de Educación y el MIDES comparten la responsabilidad de educar y capacitar a menores con discapacidades.

En mayo, en colaboración con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la SENADIS abrió la primera “infoplaza”, o café de internet gratuito, manejado por una ONG dirigida por personas con discapacidades. El Club de Ciegos de Colón fue seleccionado por ambas secretarías del gobierno para manejar este centro. Todas las computadoras tenían instalado *software* para usuarios con discapacidades.

En junio la SENADIS inauguró un nuevo edificio para acoger a la Dirección Nacional de Certificación para cumplir con la evaluación sobre discapacidades obligada por la Organización Mundial de la Salud. Para agosto, se habían recibido más de 200 solicitudes de personas con discapacidades o de sus guardianes para que fueran incluidos en la lista de espera para sus citas.

La ley estipula una cuota del 2% para personas con discapacidades en la fuerza laboral. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) es el responsable de remitir a trabajadores con discapacidades a empleadores con trabajos adecuados; sin embargo, en la práctica, la contratación exitosa por empleadores en el sector privado siguió siendo deficiente. En Agosto la SENADIS, el MITRADEL y la ONG local Sumarse auspiciaron una feria de empleo con 67 grandes empresas para ofrecer trabajos a personas con discapacidades. En agosto, la corte administrativa parte de la Corte Suprema declaró ilegal el despido en 2010 de un funcionario civil con discapacidad del Ministerio de Economía y Finanzas y ordenó su reincorporación al servicio. Aunque el ministerio justificó el despido declarando que el empleado ocupaba un cargo político, lo que permite su despido en cualquier momento, la corte declaró que el ministerio debería haber considerado las convenciones internacionales y las leyes nacionales que promueven la igualdad de oportunidades para el empleo (ver sección 7.d.).

La SENADIS continuó dirigiendo el proyecto Famiempresas, que asistía a familias de bajos ingresos con miembros con discapacidades a abrir microempresas. En julio, el gobierno proporcionó 50 balboas (US \$50) al mes a 115 nuevos

beneficiarios. Durante el año, el gobierno también donó equipo de rehabilitación a personas de bajos ingresos con discapacidades.

En junio la SENADIS capacitó a personal de la PNP en materia de derechos de las personas con discapacidades. En julio capacitó a personal de servicio al cliente de COPA Airlines y en agosto capacitó a estudiantes de enfermería de la Universidad Latina en el lenguaje de signos.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los grupos minoritarios estaban, en general, integrados a la sociedad. Sin embargo, hubo prejuicios hacia inmigrantes recientes. Diferencias culturales y de lenguaje y la condición migratoria dificultaban la integración de inmigrantes y de personas de primera generación de China, India y el Oriente Medio a la sociedad. Además, algunos miembros de estas comunidades se mostraban renuentes a integrarse a la sociedad. Miembros de estos grupos a menudo eran dueños de grandes comercios o trabajaban en la venta al por menor. Una disposición constitucional que reserva el comercio al por menor para ciudadanos del país generalmente no se aplicaba.

La comunidad afro-panameña seguía teniendo poca representación en cargos de poder político y económico. Las áreas donde habitaban carecían notablemente de servicios gubernamentales y de inversión en el sector social. El prejuicio en contra de los negros era generalmente sutil, utilizando políticas no oficiales de “derecho de admisión” en restaurantes y establecimientos comerciales que discriminaban a individuos de piel más oscura o aquellos de una condición social inferior.

La ley prohíbe la discriminación en los establecimientos públicos tales como restaurantes, tiendas y otros comercios de propiedad privada. En general, no se presentaban denuncias de discriminación en establecimientos públicos.

Hubo informes de discriminación racial contra varios grupos étnicos en el entorno laboral (ver la sección 7.d.). En general las personas de piel más clara estaban representadas de forma desproporcionada en puestos gerenciales y en trabajos que requerían atención al público, como cajeros bancarios y recepcionistas. Algunas empresas discriminaban a ciudadanos de piel más oscura mediante prácticas preferenciales de contratación.

Pueblos indígenas

La ley brinda a los indígenas los mismos derechos políticos y legales que al resto de los ciudadanos, protege su identidad étnica y sus lenguas nativas y requiere que el gobierno establezca programas de alfabetismo bilingüe en las comunidades indígenas. Los indígenas tienen el derecho legal a participar en las decisiones que afectan sus tierras, su cultura, sus tradiciones y la asignación y la explotación de recursos naturales. Sin embargo, su participación en la sociedad siguió siendo marginal. Había zonas legalmente designadas, gobernadas por líderes comunitarios tradicionales para cinco de los siete grupos indígenas del país, incluidas las comunidades Emberá-Wounaan, Ngöbe Bugle y Guna. El gobierno no reconoció estas zonas para las comunidades más pequeñas Bribri y Naso. En mayo, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras entregó un nuevo título de propiedad de tierras que abarcaba 11.640 acres de tierras colectivas, ubicadas en Alto Bayano, en la provincia de Panamá, a las personas Emberá-Wounaan asentadas ya en esa zona. A finales de año, estaban pendientes cinco reclamos por tierras colectivas. No se otorgaron nuevos títulos de propiedad para tierras colectivas alrededor de la comarca Emberá-Wounaan (regiones tradicionales con alto grado de autonomía administrativa) en la provincia de Darién, aunque en octubre el gobierno firmó un acuerdo para emitir un título de propiedad de tierras colectivas de 7.890 acres a la comunidad Ipeti Emberá.

Existe una Dirección de Política Indígena en el Ministerio de Gobierno y un vice ministerio de asuntos indígenas. El 11 de septiembre, el gobierno y muchos otros agentes, incluidas todas las autoridades tradicionales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmaron un acuerdo que delineaba los compromisos del gobierno hacia los indígenas, entre ellos el establecimiento de un ministerio y la seguridad territorial para los Naso y Bribri.

Durante el año hubo múltiples conflictos entre el gobierno y los grupos indígenas sobre decisiones que afectan las tierras indígenas. Los Ngöbe Bugle y los Naso continuaron enfrentándose al gobierno sobre las plantas hidroeléctricas en tierras indígenas y, una confrontación violenta cerca del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco dejó un saldo de cuatro indígenas y tres policías heridos.

Las comunidades indígenas siguieron luchando contra los asentamientos ilegales en su territorio. No hubo confirmación de confrontaciones violentas que involucraran a indígenas, pero en enero SENAFRONT emitió un comunicado de prensa en el que detallaba que un grupo de hombres enmascarados, supuestamente Gunas, atentaron contra dos familias de colonos en la comarca Wargandí y destruyeron sus bienes. El caso estaba siendo investigado. En febrero, la Corte Suprema falló a favor de los Emberá-Wounaan en una apelación relacionada con

violaciones de los derechos humanos en un caso de 2011 sobre asuntos territoriales en la comarca Emberá-Wounaan. En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció de la causa de los Guna de Madungandí y los Emberá de Bayano contra el gobierno por no proteger adecuada ni eficazmente los territorios ancestrales y los recursos de estos grupos después de la construcción de la presa hidroeléctrica en 1976. En julio, el abogado Valentín Jaén presentó una demanda ante la Corte Suprema en la que cuestionaba la constitucionalidad de una ley de 2006 en la que se establecía el territorio Madungandí. El abogado afirmó que los colonos que habían vivido en la zona durante 40 años fueron desplazados cuando se estableció el territorio. El conocido abogado indígena Héctor Huerta luchó contra la demanda basándose en que el territorio se había establecido para los indígenas como compensación por la inundación de sus tierras después de construirse una presa hidroeléctrica.

Los indígenas de la región de Darién solicitaron que la Autoridad Nacional del Ambiente levantara la prohibición sobre la explotación forestal impuesta en abril a causa de la comercialización ilegal de la madera. Varias comunidades indígenas en la zona, los Gunas y los Emberá-Wounaan, tienen un plan de gestión de recursos aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente y permisos de explotación que les permiten comercializar la madera de sus territorios ancestrales. El diálogo con la Autoridad Nacional del Ambiente seguía a final de año.

A pesar de que la ley del país es la máxima autoridad en las comarcas indígenas, los grupos indígenas mantuvieron considerable autonomía. A pesar de esto, muchas personas indígenas no entendieron sus derechos y no utilizaron los canales legales al recibir amenazas por no tener un conocimiento adecuado del idioma español. En julio, la Corte Suprema falló que el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco era válido. Con ello, se les denegó a los Ngöbe Bugle su solicitud de declarar nulo el estudio de impacto ambiental, que se les había presentado en español durante una consulta pública que tuvo lugar fuera de la comarca. Las ONG de derechos humanos argumentaron que la decisión representaba un revés para los derechos de los indígenas, ya que el juez dictaminó que el español es el idioma legal en Panamá y que por lo tanto no existía la necesidad de que la consulta hubiese sido en Ngöbe o traducida al Ngöbe.

La discriminación social y laboral de los indígenas era común. Los empleadores a menudo no ofrecían a los trabajadores indígenas los derechos básicos establecidos por ley, tales como salario mínimo, beneficios de seguro social, liquidación y estabilidad laboral. Los trabajadores en las plantaciones de azúcar, café y bananos del país (la mayoría, personas indígenas) continuaban trabajando en situación de

hacinamiento y sin condiciones sanitarias. Era menos probable que los empleadores brindaran viviendas o alimentos adecuados a trabajadores migrantes indígenas, y era más probable que los niños indígenas trabajaran largas horas en el trabajo agrícola que los niños no indígenas (ver sección 7.d.). El MITRADEL ejercía una supervisión limitada en cuanto a las condiciones laborales en áreas remotas debido a limitaciones de personal.

La educación siguió siendo deficiente en las comarcas indígenas, especialmente más allá de la escuela primaria. No había profesores suficientes a causa de la distancia y la dificultad de acceso a las zonas, con muchas escuelas multigrado, a menudo de construcción deficiente y con falta de agua corriente. En febrero, con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y a la información, el gobierno abrió cinco nuevas “infoplazas” en la comarca Ngöbe Bugle. El acceso a la atención médica siguió siendo un grave problema en las comarcas indígenas, evidenciado en las altas tasas de mortalidad materno-infantil y de desnutrición. Para abordar estos problemas, el Ministerio de Salud estableció la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas. Muchos obreros indígenas migraron, según la estación del año, de Panamá a Costa Rica, y ambos gobiernos estaban preocupados en cuanto al incremento en los riesgos a la salud. El Ministerio de Salud estableció centros de atención de salud primaria para vacunaciones y exámenes médicos rutinarios cerca de cruces fronterizos para esta población migrante, a fin de mejorar los controles sanitarios y los resultados de los embarazos, y para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La ley no prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual, y existió discriminación social relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, lo cual a menudo llevó a que se negaran oportunidades de empleo (ver sección 7.d.). Los reglamentos de la PNP describen la conducta homosexual como una “falta grave”. El acoso a personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT, por sus siglas en inglés) por parte de las fuerzas de seguridad fue una de las principales denuncias de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), la principal organización LGBT en el país. No obstante, las denuncias formales eran raras debido a la percepción de que no se las tomaba en serio o de que podían ser utilizadas en contra de los querellantes en vista de que no existían leyes no discriminatorias. El 28 de junio los defensores de los derechos de homosexuales encabezaron el décimo desfile anual de orgullo gay sin obstáculo alguno.

La asociación panameña de personas transgénero reportó incidentes habituales en los cuales las fuerzas de seguridad rehusaron aceptar denuncias de acoso hacia personas transgénero.

El país no reconoce las relaciones entre parejas LGBT en cuanto a la atención médica, la patria potestad, los derechos de propiedad o cualquier servicio público que se proporcione.

El estigma social del VIH y el SIDA

La ley prohíbe la discriminación contra personas con VIH-SIDA en lo laboral y lo educativo, pero la discriminación persistía debido a la ignorancia de la ley y a la falta de mecanismos para garantizar su cumplimiento. En agosto, el MIDES lanzó la nueva red nacional para la atención integral ininterrumpida de las personas con VIH-SIDA. En la red participan representantes de los ministerios de salud y de desarrollo social, así como de ONG locales.

Los ciudadanos LGBT denunciaron haber sido maltratados por trabajadores de la salud, como haber sido puestos en cuarentenas sin ser necesario. En septiembre, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos Relacionados al VIH en Panamá reclamó públicamente la falta de medicinas para el VIH-SIDA en hospitales públicos. Las autoridades del Ministerio de Salud admitieron retrasos en los procesos de adquisición debidos a la burocracia y, a veces, a la falta de empresas participantes en licitaciones.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho a negociación colectiva

La ley reconoce el derecho de los trabajadores del sector privado de formar y unirse a los sindicatos de su elección, supeditado a que el sindicato esté registrado ante el gobierno. Los servidores públicos no pueden formar sindicatos, pero sí pueden formar asociaciones que pueden negociar colectivamente en nombre y representación de sus miembros.

La ley otorga el derecho a huelga de los trabajadores del sector privado y la Ley de Carrera Administrativa otorga a los servidores públicos el mismo derecho (cuando se considera legal y cuando los cargos esenciales están cubiertos por el porcentaje mínimo de trabajadores que estipula la ley). No hay derecho a huelga en aquellas

áreas que se consideran vitales para el bienestar público y la seguridad, como las de policías y trabajadores de la salud. La ley establece que todos los trabajadores de los sectores privado y público tienen el derecho a negociar colectivamente, prohíbe la discriminación de los sindicatos por parte de los empleadores y protege de perder sus trabajos o de traslados discriminatorios a trabajadores que participen en actividades de sindicatos. Exige la reincorporación de trabajadores despedidos por actividades sindicales.

La ley impone varias restricciones a estos derechos, incluida la de requerir la ciudadanía para estar en la junta directiva de un sindicato, requerir un mínimo de 40 personas para formar un sindicato en el sector privado (ya sea por empresa sin consideración de oficio o por oficio sin considerar la empresa) y permite solo un sindicato por establecimiento comercial. La Organización Internacional del Trabajo siguió criticando el mínimo de 40 personas por ser este un número muy alto para trabajadores interesados en formar un sindicato en una empresa. El gobierno, el sector privado y los sindicatos reiteraron su apoyo en mantener esa cifra.

De forma similar, se requieren 50 servidores públicos para formar una asociación de trabajadores. Las asociaciones de miembros representan a servidores públicos como médicos, enfermeras, bomberos y personal administrativo en ministerios del gobierno. La ley estipula que no puede haber más de una asociación en una institución del sector público y no permite más de una sección por provincia.

La ley estipula que si el gobierno no responde a una solicitud de registro en 15 días, el sindicato automáticamente obtiene reconocimiento legal.

Las huelgas deben ser apoyadas por la mayoría de los empleados y estar relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo, una convención colectiva o en apoyo de otra huelga de trabajadores en el mismo proyecto (huelga solidaria). En caso de una huelga de personal administrativo, por lo menos el 25% de la fuerza laboral debe continuar brindando servicios mínimos; y el 50% de los trabajadores que brindan “servicios públicos esenciales” según los define la ley – como los de transporte, bomberos, correos, hospitales y telecomunicaciones–, deben continuar brindándolos.

Las huelgas en los servicios de transporte esenciales se limitan a las de servicios públicos de pasajeros. La ley prohíbe el derecho a huelga a los empleados de la Autoridad del Canal de Panamá, pero permite que se organicen sindicatos y que se negocie colectivamente en cuanto a temas como horarios y seguridad. También

estipula que las disputas se resuelven mediante arbitraje. Por ley, la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), una federación coordinadora con 21 asociaciones de trabajadores del sector público, no tiene la facultad de decretar una huelga ni de negociar acuerdos colectivos. No obstante, las organizaciones individuales bajo la FENASEP pueden negociar en representación de sus miembros.

Decisiones de la Corte Suprema reconocen que los acuerdos colectivos negociados entre empleadores y trabajadores no organizados tienen condición legal equivalente a los acuerdos colectivos negociados por un sindicato. Los decretos ejecutivos estipulan que un empleador no puede celebrar acuerdos colectivos con trabajadores que no pertenezcan a sindicatos cuando existe un sindicato y que un acuerdo preexistente con trabajadores que no pertenezcan a un sindicato no puede ser utilizado para rehusarse a negociar con trabajadores sindicalistas. El manual de derechos y obligaciones laborales del MITRADEL estipula que los trabajadores no organizados pueden presentar una petición al ministerio en relación con violaciones de derechos laborales y pueden ejercer el derecho a la huelga.

Un decreto ejecutivo protege a los trabajadores de la interferencia del empleador en los derechos laborales, que incluye específicamente a “los sindicatos dirigidos por empleadores”, y hace obligatorio que los sindicatos sean escogidos libremente por los trabajadores sin sanciones.

El gobierno carecía de suficientes mecanismos para garantizar el cumplimiento adecuado de las leyes que prohíben la interferencia por parte de los empleadores en los sindicatos y que protegen a los trabajadores de represalias de los empleadores. Se pueden imponer multas de 100 a 2.000 balboas (US \$100 a US \$2.000) a los empleadores cuando se demuestra y determina que han interferido con los sindicatos; estas multas se duplican cada vez que un empleador repite el acto de interferencia. El MITRADEL reportó que la falta de personal, la mora en casos y la información incompleta o incorrecta en las solicitudes atrasaron el proceso de registro de nuevos sindicatos dentro del periodo de tiempo requerido. Para septiembre, el ministerio reportó cuatro nuevos registros durante el año, todos desde que el nuevo gobierno tomó cargo en julio. El ministerio continuó su participación en la Fundación del Trabajo, una organización tripartita que agrupa a los trabajadores organizados, a los empleadores y al gobierno.

Además del sistema judicial, la Junta de Conciliación del MITRADEL tiene la facultad de resolver algunas disputas laborales, tales como disputas sindicales internas, el cumplimiento del salario mínimo y algunos temas relacionados con

despidos. La ley permite arbitraje por consentimiento mutuo, a solicitud del trabajador o a solicitud del ministerio en caso de una disputa colectiva en una empresa de servicios públicos y permite a cualquiera de las dos partes apelar si se ordena un arbitraje durante una disputa colectiva en una compañía de servicios públicos. La Junta de Conciliación Tripartita tiene competencia única para disputas relacionadas con los empleados domésticos, algunos asuntos relacionados con despidos y reclamos de menos de 1.500 balboas (US \$1.500). Para los trabajadores del sector público, la Junta de Apelaciones y Conciliaciones en el Ministerio de la Presidencia conoce de reclamaciones y las resuelve. Si la junta no las resuelve, las reclamaciones se refieren a un tribunal de arbitraje, el cual consiste de representantes del empleador, la asociación de empleados y un tercer miembro seleccionado por los dos primeros. Las decisiones del tribunal son finales.

A pesar de que los sindicatos en el sector privado ejercían ampliamente su derecho a organizarse y negociar colectivamente, se daban casos de discriminación de los sindicatos, pérdida de empleo y traslados discriminatorios. Los líderes sindicalistas siguieron expresando sus inquietudes relacionadas con las acciones del gobierno, como la auditoría de presupuestos sindicales. El gobierno de Varela presentó una solicitud para desechar acusaciones penales que el gobierno anterior había formulado contra nueve líderes sindicalistas, por considerarlos actos de interferencia e intimidación. Los dirigentes sindicalistas informaron que los sindicatos fueron acosados por el gobierno anterior, incluso mediante falsas acusaciones de corrupción contra líderes sindicalistas, poniendo obstáculos a la organización de los trabajadores y criminalizando las protestas sociales. Los empleadores del comercio al por menor frecuentemente contrataban trabajadores temporales con el fin de eludir los requisitos obligatorios para los trabajadores permanentes. En los empleos de servicio que no requieren habilidades especializadas, los empleadores a menudo contrataban a los trabajadores bajo contratos de menos de tres meses por varios años, y a veces enviaban a dichos trabajadores de regreso a sus hogares por un mes para luego volverlos a contratar. Los empleadores también eludían la ley que requiere dos semanas de preaviso para el despido al echar a los trabajadores una semana antes de un día feriado. Debido a leyes que dificultan el despido de empleados que han trabajado dos años o más, los empleadores a menudo contrataban a los empleados por un año y once meses para luego despedirlos.

Mientras que los líderes sindicales en general aprobaban la junta de conciliación, algunos grupos de abogados la criticaban como una ruta para eludir el sistema judicial, ya que dejan la interpretación de leyes laborales en mano de personas que

podrían no tener pericia y abren el sistema de resolución de disputas laborales a la presión política.

b. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzado de adultos o menores. La ley estipula penas de 15 años a 20 años de cárcel por trabajo forzado que involucre traslado (ya sea a través de fronteras o dentro de un país), y de 6 años a 10 años de cárcel por trabajo forzado que no involucre traslado.

Se informó de algunos casos de trabajo forzado de adultos. Hubo informes anecdóticos de que ciudadanos chinos fueron forzados a trabajar en tiendas de alimentos y lavanderías en situaciones de servidumbre por deuda, al igual que informes sobre mujeres colombianas y nicaragüenses sujetas a situaciones de servidumbre doméstica.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe que niños menores de 14 años trabajen, aunque los niños que no han completado la escuela primaria no pueden empezar a trabajar hasta los 15 años. Se pueden hacer excepciones para niños de 12 años o más para que realicen trabajo agrícola ligero, siempre y cuando no influya desfavorablemente en sus horas escolares. La ley no limita la cantidad total de horas que los menores pueden trabajar en la agricultura ni define qué tipo de trabajo ligero pueden realizar los menores. La ley prohíbe a niños de 14 a 18 años participar en trabajo potencialmente peligroso e identifica dicho trabajo peligroso como labores que incluyen energía eléctrica, explosivos, o sustancias inflamables, tóxicas o radioactivas; trabajo bajo tierra y en ferrocarriles, aviones y barcos; y trabajo en clubes nocturnos, bares y casinos.

Los jóvenes menores de 16 años no pueden trabajar más de 6 horas al día o 36 horas a la semana, mientras que los que tienen 16 años y 17 años no pueden trabajar más de 7 horas por día o 42 horas a la semana. Los menores de 18 años no pueden trabajar entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la mañana.

El MITRADEL generalmente aplicó la ley efectivamente en el sector formal haciendo cumplir las disposiciones de trabajo infantil en respuesta a denuncias y

dando la orden de terminar una relación laboral no autorizada, mas no lo hizo en la economía informal. Durante el año, el MITRADEL identificó a 1.508 niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil. Por ley los infractores pueden ser multados hasta 700 balboas (US \$700) por una primera infracción. Para fines de año, el ministerio había recibido 18 denuncias formales sobre violaciones a las leyes de trabajo infantil, que dieron lugar a siete sanciones contra los infractores. Funcionarios del ministerio informaron que habían recibido los pagos en dos de los casos. Los empleadores que ponen en peligro la salud física o mental de un menor se enfrentan a encarcelamiento de dos años a seis años. La ley incluye un castigo de hasta 12 años de cárcel para cualquiera que reclute a menores de 18 años o los utilice para participar activamente en hostilidades armadas.

Como parte del programa del MITRADEL para la prevención y la erradicación del trabajo infantil, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección a la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT) continuó con la promoción comunitaria y siguió otorgando becas a menores trabajadores en todo el país para garantizar su acceso a la educación a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), habiendo otorgado 1.426 becas durante el año. El ministerio, el CETIPPAT y la ONG Casa Esperanza continuaron un programa a nivel nacional que incluyó visitas a la comarca Ngöbe Bugle y a la isla Esmeralda y a San Miguel en la provincia de Panamá. El programa proporcionó becas a trabajadores infantiles para que pudieran iniciar o volver a la escuela primaria y proporcionó capacitación laboral y programas de alfabetización para sus padres.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ejecutó programas para identificar a menores que participaban en las peores formas de trabajo infantil con el fin de sacarlos de las situaciones de explotación y de brindarles servicios. El MITRADEL ofreció capacitación sobre el tema de trabajo infantil y lecciones aprendidas a varias partes interesadas.

Conforme a la encuesta de trabajo infantil de 2012 realizada por el gobierno, aproximadamente 50.400 niños y adolescentes (un 5,6% de la población total en el rango de 5 años a 17 años) trabajaban. El 61% de los niños trabajadores también asistían a la escuela. El 40% de los niños y adolescentes trabajadores dijeron que trabajaban menos de 15 horas a la semana, el 35,5% trabajaba entre 15 horas y 34 horas y el 24,6% trabajaba 35 horas o más.

Las violaciones en cuanto a trabajo infantil se registraban principalmente en áreas rurales en la agricultura y la pesca, especialmente durante la cosecha de melones,

tomates, cebollas, café y, en menor grado, caña de azúcar. Los menores generalmente trabajaban de cinco horas a ocho horas por día en estas actividades. Los dueños de las fincas a menudo pagaban conforme a la cantidad cosechada, lo que hacía que muchos trabajadores trajeran a sus niños pequeños a los campos para ayudar. El problema del trabajo infantil en las áreas agrícolas recaía más sobre las familias indígenas que a menudo migraban de sus comunidades aisladas en busca de trabajo remunerado y cuyas frecuentes migraciones interrumpían la escolarización. El trabajo infantil también se registró en la pesca, la ganadería, el trabajo doméstico y otras áreas del sector informal, incluidas la venta de mercancía, limpiabotas, lava autos y asistentes en el tallado de madera.

De acuerdo a Casa Esperanza, el trabajo infantil persistió en las áreas agrícolas en las provincias centrales y fue identificado en nuevos sectores de la Ciudad de Panamá, Colón y David. En Colón los menores buscaban en el océano metal y otros enseres de los barcos para vender. En David los menores vendían flores y CD-DVD en la calle.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo sobre la peores formas de trabajo infantil (*Findings on the Worst Forms of Child Labor*) en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación con respecto al empleo u oficio

Las leyes y reglamentaciones laborales prohíben la discriminación basada en la raza, sexo, discapacidad, idioma y condición social, pero no lo hace por orientación sexual o identidad de género, estatus positivo de VIH u otras enfermedades contagiosas o condición social. El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentaciones de forma eficaz.

La discriminación en el empleo y oficio tuvo lugar por razón de raza, sexo, género, discapacidad, orientación sexual o identidad de género y estatus positivo de VIH (ver sección 6). También existió la discriminación hacia los trabajadores migrantes (ver sección 6).

e. Condiciones de trabajo aceptables

A final de año, el salario mínimo era de 1,22 balboas a 2,36 balboas (US \$1,22 a US \$2,36) por hora, dependiendo de la región y del sector. Al trabajar una semana de 40 horas, 50 semanas al año, y ganando el salario mínimo promedio, un trabajador ganaría aproximadamente de 432 balboas a 490 balboas (US \$432 a

US \$490) por mes. La línea de pobreza era de 98 balboas (US \$98) en áreas rurales, mientras que en las áreas urbanas era de 131 balboas (US \$131). Los alimentos y el uso de viviendas se consideraban parte del salario para algunos trabajadores, tales como trabajadores domésticos y agrícolas. Los salarios para los empleados domésticos eran de 175 balboas a 200 balboas (US \$175 a US \$200) por mes. Los sectores agrícola y de la construcción recibieron el salario mínimo más bajo y el más alto respectivamente.

La ley establece una semana estándar de 48 horas, brinda por lo menos un periodo de descanso semanal de 24 horas, limita el número de horas que se trabaja por semana, brinda una prima salarial por sobretiempo y prohíbe sobretiempo obligatorio. No hay límite anual sobre la cantidad total de horas de sobretiempo permitidas. Si los trabajadores trabajan más de tres horas de sobretiempo en un día o más de nueve horas de sobretiempo en una semana, las horas excedentes de sobretiempo deben ser pagadas con una prima del 75% por encima del salario normal. Los trabajadores tienen el derecho a 30 días de vacaciones remuneradas por cada 11 meses de trabajo continuo, incluidos aquellos que no trabajan a tiempo completo. El MITRADEL se encarga de establecer los estándares de salud y seguridad. Los estándares establecidos estaban, en general, actualizados y eran adecuados para las industrias principales en el país. El código de trabajo requiere que los empleadores provean un entorno laboral seguro, incluso el suministrar equipo y ropa de protección para los trabajadores.

El MITRADEL generalmente aplicó estos estándares en el sector formal. La oficina de inspección estaba dividida en dos grupos: la sede central en la Ciudad de Panamá y el grupo regional. Dentro de la sede central había 48 inspectores laborales, incluidos 18 inspectores de trabajo general, 10 inspectores de trabajo infantil y 20 inspectores de seguridad (también denominados *oficiales de seguridad*) en la industria de la construcción. Los salarios de los inspectores de la construcción fueron pagados por la industria de la construcción, aun cuando los inspectores eran empleados del ministerio. Las ramas regionales tenían un total de 70 inspectores. Hasta agosto, el MITRADEL había llevado a cabo 16.990 inspecciones laborales. Las multas permitidas por violaciones fueron bajas y en general insuficientes para impedir las violaciones. Durante el año, sin embargo, el gobierno aplicó multas de acuerdo al número de trabajadores afectados, lo cual produjo, en total, multas más altas. Para agosto, el ministerio había impuesto 115 multas por violaciones en materia de migración, 29 multas por temas de seguridad, 370 multas por temas laborales generales y 75 multas relacionadas con violaciones en materia de trabajo de menores.

Los inspectores del MITRADEL y la sección de salud ocupacional de la Caja de Seguro Social informaron que habían realizado inspecciones periódicas a sitios de trabajo peligrosos. La ley requiere que el ingeniero residente y un inspector de la industria de la construcción del MITRADEL permanezcan en las construcciones, establece multas por incumplimiento, e identifica a un grupo tripartito compuesto por la Cámara de Construcción, el sindicato de la construcción SUNTRACS (el sindicato más grande de trabajadores de la construcción del país) y el MITRADEL, para regular la adherencia a estas normas.

La mayoría de los trabajadores empleados formalmente en las áreas urbanas ganaban el salario mínimo o más. Aproximadamente un 40% de la población que trabaja lo hizo en el extenso sector informal y muchos ganaban bastante menos que el salario mínimo, particularmente en la mayoría de las áreas rurales, donde los trabajadores no calificados –incluidos los vendedores ambulantes y aquellos en los sectores de la silvicultura, la pesca y la producción de artesanías– ganaban de tres balboas a seis balboas (US \$3 a US \$6) por día sin beneficios. Era menos probable que el MITRADEL aplicara las leyes laborales en la mayoría de las áreas rurales (ver sección 6, Personas indígenas).

Para agosto, nueve trabajadores de la construcción habían fallecido debido a accidentes sufridos en el trabajo. Algunos trabajadores de la construcción y sus empleadores ocasionalmente eran laxos en la aplicación de las medidas básicas de seguridad, frecuentemente porque percibían que reducían la productividad. El equipo a menudo era viejo, estaba roto o carecía de dispositivos de seguridad, en gran parte debido a temor de que el costo de reemplazo fuera prohibitivo.

Los trabajadores no podían salir de situaciones que ponían en peligro la salud o la seguridad sin arriesgar su empleo, y las autoridades no protegieron eficazmente a los trabajadores en esta situación.